Artículos

La ONU evalúa la primera década del tercer milenio: "Necesitamos justicia, no más de lo mismo"

Autores corporativos:
Instituto del Tercer Mundo (canal)

Autores personales:
Bissio, Roberto (Ponente)

Descripción

Lugar:
Montevideo (Uruguay)

Fecha:
24 de Junio de 2010

Entradilla:
En preparación de una nueva cumbre mundial contra la pobreza, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a representantes del sector privado y de la sociedad civil a expresar sus opiniones. En la audiencia del 15 de junio, por primera vez en la historia la mitad de los asientos en la sede de las Naciones Unidas estuvieron reservados a los gobernados y la otra mitad a los gobiernos. En nombre de la red internacional Social Watch, que vigila el cumplimiento de las promesas en setenta países del mundo, Roberto Bissio realizó la siguiente intervención.

Introducción/Descripción:
El próximo mes de setiembre los presidentes y primeros ministros del mundo se reunirán en esta sala para evaluar los esfuerzos de una década de lucha contra la pobreza y analizar los pasos a seguir ante una conjunción sin precedentes de crisis mundiales. Crisis de clima, de alimentos, de energía y de finanzas, que a su vez impacta las economías reales.

La Organización de las Naciones Unidas se creó hace más de seis decenios en torno a la convicción de que debía existir un mundo "libre de temor y miseria" y con "dignidad para todos" dentro del marco de una "paz justa y duradera". En 1995, una vez finalizada la Guerra Fría, este sueño se convirtió en el solemne compromiso, por parte de todos los jefes de Estado y de gobierno, de eliminar la pobreza del mundo y alcanzar la equidad de género. En 2000, la Declaración del Milenio fijó el año 2015 para el logro de los más urgentes objetivos de desarrollo social acordados internacionalmente, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Más de cien presidentes, monarcas y primeros ministros refrendaron el siguiente compromiso: "No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de mil millones de seres humanos". El Objetivo 1 promete reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que viven en situación de pobreza y con hambre.

En setiembre de 2008 ministros de todo el mundo declararon que "sin embargo, 1.400 millones de personas –mujeres y niñas en su mayoría– siguen viviendo en la pobreza extrema" y en enero de 2010 el Banco Mundial anunció que "se estima que, debido a la crisis, para fines de 2010 es posible que otros sesenta y cuatro millones de personas estén viviendo en la pobreza extrema".

Con 1.500 millones de personas viviendo en situación de pobreza extrema en 2010 (los 1.400 millones de 2008, más sesenta y cuatro millones que se agregaron debido a la crisis en 2009), ¡la promesa de reducir la pobreza a la mitad en 2015 parece casi imposible de cumplir!

De hecho, según el informe del secretario general de las Naciones Unidas, la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza de un dólar diario "aumentó en noventa y dos millones en África subsahariana y en ocho millones en Asia occidental durante el período 1990-2005". Más aun, "la situación de la pobreza se torna más grave cuando también se toman en cuenta otras dimensiones de pobreza reconocidas en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, tales como la privación, la exclusión social y la falta de participación".

Hablando a los jefes de Estado en setiembre de 2005, cuando los ODM estaban siendo revisados cinco años después de la Cumbre del Milenio, Leonor Briones, de Filipinas, dijo en nombre de la sociedad civil: "Los ODM no habrán de alcanzarse en 2015 [si] el medio ambiente continúa siendo devastado y los temas mundiales de comercio, deuda y asistencia oficial para el desarrollo siguen sin ser resueltos".

El Objetivo 8 llama a establecer "alianzas mundiales" en torno al comercio, la asistencia, la cancelación de la deuda y la transferencia de tecnología a fin de hacer posible que los países en vías de desarrollo alcancen los otros siete objetivos relativos a salud, educación y saneamiento.

En la cancelación de la deuda externa bilateral y multilateral de algunos de los países más pobres ha habido algunos avances, pero éstos distan mucho de ser suficientes. En el área del comercio no se verifican pasos positivos. En setiembre de 2001, en Doha, dio inicio una "ronda de desarrollo" de negociaciones comerciales. Su componente pro desarrollo es insignificante y de todas maneras la ronda está estancada y lejos de su conclusión. La transferencia de tecnología se ha vuelto aún más costosa debido a la estricta aplicación de las normas de propiedad intelectual. La ayuda externa no ha aumentado en lo más mínimo. En 1992 ascendía a 0,44 por ciento de los ingresos de los países donantes y en 2008 al 0,43 por ciento.

El incumplimiento, por parte de los países desarrollados, de los compromisos asumidos en el Objetivo 8 se vincula, por cierto, a los insuficientes avances en los demás ODM. La dispar distribución de recursos internos es el otro gran obstáculo. Durante los primeros años del siglo XXI, muchos países en desarrollo experimentaron elevados niveles de crecimiento económico, pero la reducción de la pobreza y la creación de empleo quedaron a la zaga. El "incumplimiento en materia de financiación, servicios, apoyo técnico y alianzas" se vio "agravado por las crisis alimentaria y económica mundiales, así como por el fracaso de diversas políticas y programas de desarrollo", reconoce el informe de Ban Ki-moon. "La mejora de las condiciones de vida de los pobres ha sido inaceptablemente lenta, y además se están erosionando algunos beneficios que costó mucho obtener". El secretario general de las Naciones Unidas afirma que los ODM son "una expresión de los derechos humanos fundamentales: los derechos de todos a gozar de buena salud, educación y vivienda".

Abordar los ODM como derechos humanos fundamentales implica vincular la eliminación de la pobreza con el fortalecimiento de la equidad y la integración social. Según un reciente informe sobre la situación social en el mundo de 2010, "un enfoque integral de las políticas económicas y sociales para beneficio de todos los ciudadanos […] exige un nivel de activismo y universalismo del Estado en las políticas sociales [en contraposición a la atención selectiva a los más pobres] que sea progresista y orientado al desarrollo".

En situaciones de emergencia siempre existe la necesidad de implementar políticas sociales focalizadas, pero las observaciones de los miembros de Social Watch durante el último decenio demuestran que tales políticas no son un buen sustituto de la prestación universal de servicios sociales ni de los enfoques basados en derechos.

El informe 2009 de Social Watch encontró, además, numerosas indicaciones que demuestran que invertir en los pobres, a través de servicios sociales o incluso por medio de transferencias monetarias directas, constituye un mejor paquete de estímulos para las economías en general que subsidiar a quienes ya son ricos. La razón para esta correspondencia entre los imperativos éticos y la sensatez económica es sencilla; en épocas de crisis las personas acomodadas ahorran cuanto pueden, al tiempo que la aversión al riesgo desalienta a los inversores, mientras que lo único que pueden hacer quienes viven en la pobreza es gastar el apoyo que reciben.

La red Social Watch, con miembros en más de setenta países, participará en forma activa en el proceso que precederá a la próxima Cumbre de setiembre y aportará las conclusiones y análisis de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.

"Si los pobres fueran un banco, ya se los habría rescatado", comentan muchos con ironía ni bien comparan la suma de dinero adicional que se requiere para cumplir con los ODM (unos 100.000 millones de dólares al año) con los billones de dólares que se han desembolsado en los últimos dos años en los países más ricos para rescatar a los bancos en quiebra e intentar revertir los efectos de la crisis financiera.

No obstante, en la práctica, los menos privilegiados, tanto en países ricos como en países pobres, no sólo sufren las consecuencias directas de la crisis bajo la forma de pérdida de empleos, ahorros e incluso viviendas, sino que también se les exige que paguen los rescates y los paquetes de estímulo por medio de impuestos más elevados y la reducción de salarios y beneficios sociales.

En tal contexto, hacer un llamado para implementar "más de lo mismo" no es la solución. Mayor asistencia monetaria y mejores condiciones comerciales para los países en desarrollo constituyen un imperativo ético, ahora más que nunca. Pero, para confrontar los drásticos impactos sociales y ambientales de las múltiples crisis, es necesario moverse más allá del enfoque de "los mismos negocios de siempre" y comenzar a trabajar en pos de un programa integral de

justicia.

- **Justicia climática** (reconocer la "deuda climática", invertir en tecnologías limpias y en la promoción de economías verdes que generen empleos decentes).
- **Justicia financiera y fiscal** (el sector financiero debe pagar la crisis que generó por medio de un impuesto a las transacciones financieras [FTT, en inglés] o un mecanismo similar; se debe reglamentar la especulación y los paraísos fiscales y finalizar o revertir la "carrera a la baja" de las políticas impositivas; se debe permitir que los países en desarrollo impongan controles defensivos de flujos de capital y espacio político).
- **Justicia social y de género** (cumplir con los ODM, promover la igualdad de género, los servicios sociales básicos universales y la "dignidad para todos") y…
- **Justicia lisa y llana** (jueces y tribunales) que exija el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales.

En épocas de crisis sin precedentes se requiere que los líderes tengan el coraje de ser audaces e innovadores.

La noción de que aquel que contamina debe pagar la limpieza del estropicio que su irresponsable conducta ha creado no sólo se sustenta en la justicia y en el sentido común. Es también una demanda política que los líderes no pueden ignorar. De forma similar, los ciudadanos de todo el mundo apoyan la noción de que los costos de la crisis financiera deberían ser pagados por los agentes financieros que eran "demasiado grandes como para fracasar", pero que fracasaron igualmente. Es injusto y políticamente inviable esperar que sean los ciudadanos, bajo la forma de impuestos más altos y sueldos más bajos, y el deterioro de los servicios de seguridad social, educación y salud, quienes carguen con el fracaso de esos agentes.

Durante los últimos veinte años, una pequeña cantidad de personas (diez millones) que representan menos de 0,5 por ciento de la humanidad, han retirado como mínimo, cada uno de ellos, un millón de dólares del control de sus gobiernos, de cualquiera de los gobiernos aquí representados, ubicándolos en los mercados negros de la economía subterránea offshore. Esta suma de más de diez billones de dólares de dinero no declarado ni gravado no es un tesoro enterrado y escondido en alguna ensenada, sino que fluye a través de redes electrónicas, especulando contra las monedas nacionales, generando inestabilidad en el comercio mundial ilegítimo e inflando "burbujas" financieras que a su vez crean, por ejemplo, distorsiones de precios en materias primas del agro que llevan a la crisis alimentaria.

Reclamar control sobre estas salvajes fuerzas financieras de enorme potencial destructivo sobre todas las economías es un tema que requiere colaboración internacional, y esta Asamblea General es el lugar legítimo para tomar decisiones sobre la colaboración internacional impositiva, establecer un Impuesto a las Transacciones Financieras y destinar una sustantiva proporción de los recursos que genera para el desarrollo, frenando de manera efectiva los flujos financieros ilícitos, incluyendo aquellos derivados de "precios de transferencia" que evaden impuestos, y por último, pero no menos importante, establecer mecanismos de renegociación de deuda justos para deudas soberanas y una afirmación de la legitimidad de las moratorias de deuda para los países en desarrollo abrumados por una crisis que no han creado.

Hace diez años la Declaración del Milenio prometía "un mundo más pacífico, más próspero y más justo". Social Watch ha asumido el compromiso de ayudar a los ciudadanos de todo el mundo a exigir que sus gobiernos rindan cuenta de esta promesa.

Muchas gracias, señor presidente.

Publicado en:

Agenda Global ; Gloobalhoy nº22

Secciones GloobalHoy:

060- Derechos-humanos

Notas:

Publicado en Agenda Global, nº155, 24 de junio de 2010

Clasificación

Escenarios:

Internacional

Descriptores:

Derechos humanos ; FIDC ; Justicia ; Justicia climática ; Justicia de género ; Justicia social ; Pobreza ; Políticas sociales ; Violaciones de los derechos humanos

Regiones:

Internacional

Relacionados

Otros textos relacionados:

Social Watch y los MDGs a 10 años: "Necesitamos justicia, no más de lo mismo"

webmaster@gloobal.net